

El proceso de paz y el Plan Colombia en la prensa norteamericana

Diana Marcela Rojas Rivera

Instituto de estudios políticos y relaciones internacionales
—IEPRI, Universidad Nacional de Colombia

Adolfo León Atehortúa

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional

Entre 1997 y 2001, Colombia ha obtenido una visibilidad y un lugar central en la política norteamericana hacia América Latina. Nunca antes el país había ocupado las páginas centrales de la prensa en Estados Unidos ni generado tanta atención por parte de la Casa Blanca y del departamento de Estado, o audiencias del Congreso en Washington.

Esta ponencia intenta explorar las diversas vertientes que en el gobierno, el Congreso, la prensa y la opinión, afloraron en Estados Unidos con motivo del conflicto político armado en nuestro país, las negociaciones con la guerrilla, y el *Plan Colombia*¹. El examen de la prensa norteamericana a partir de 1999, nos permite establecer de qué manera se fue gestando la estrategia conocida como *Plan Colombia*, al ritmo tanto de los acontecimientos en nuestro país como de los debates y posiciones en Estados Unidos. Esta aproximación, además de narrar el desarrollo de la problemática colombiana vista desde la prensa norteamericana, nos conduce a evidenciar la complejidad de los procesos en la formulación e implementación de la política exterior norteamericana, particularmente hacia Colombia, y establecer la incidencia crucial que tienen, en estos procesos, la percepción de la opinión y el debate públicos.

1. UN CAMBIO EN LA MIRADA HACIA COLOMBIA

Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), las relaciones con Estados Unidos fueron muy tensas. Los dos últimos años de su mandato, dichas relaciones se plantearon en torno a la erradicación de cultivos ilícitos y en una proximidad casi personal con el general Serrano, director general de la policía. El tema colombiano en Estados Unidos era manejado por el subsecretario para asuntos interamericanos, el subse-

cretario para asuntos de narcóticos y el zar antidrogas. El presidente Clinton no estaba muy cerca del asunto, ni tampoco la secretaria de Estado.

Hacia finales de 1997, la situación empezó a modificarse. En los círculos políticos y de negocios en Estados Unidos comenzó a presentarse una creciente preocupación acerca de la estabilidad democrática en Colombia². Tal como lo declaró el embajador Miles Frechette en una entrevista al dejar su cargo, «*Estados Unidos está consciente de que se acerca un proceso de paz y que debe jugar un papel frente a él*»³.

Con la elección de Andrés Pastrana como presidente de Colombia, se inició un nuevo período. En julio de 1998, Pastrana fue recibido de manera informal por Bill Clinton en un encuentro trascendente. En ese momento, las preocupaciones compartidas por diversos miembros del Congreso norteamericano ligaban las negociaciones de paz al asunto de la droga y, por consiguiente, el apoyo de Clinton a las conversaciones del gobierno colombiano con el movimiento guerrillero era decisivo.

Las posiciones reflejadas en Estados Unidos acerca del proyecto negociador de Pastrana se expresaron en dos grandes líneas. Por un lado, el Departamento de Estado brindaba un voto de confianza al presidente colombiano para iniciar conversaciones con la guerrilla y buscar un acuerdo que llegara a compromisos en materia de erradicación. En concreto, el 28 de octubre de 1998, Clinton dio su espaldarazo: «*el presidente Pastrana tiene la voluntad, el coraje y el apoyo del pueblo para construir la paz. Le doy la bienvenida a sus esfuerzos de abrir las puertas del diálogo con los grupos insurgentes*»⁴.

Pero, por otro lado, la mayoría republicana en el Congreso, liderada por Benjamin Gilman y Dennis Hastert, mostraba su recelo ante la zona de despeje y exigía al propio Clinton una observación especial para la certificación antidrogas que de-

bía expedirse en 1999: si el área cultivada aumentaba en dicha zona, toda ayuda hacia Colombia sería paralizada. Precisamente, en septiembre de 1998, en el Congreso de Estados Unidos se empezó a abrir paso una propuesta para suspender la ayuda militar a Colombia si el gobierno desmilitarizaba los cinco municipios que exigía la guerrilla de las FARC-EP para negociar. La iniciativa fue del senador republicano Benjamin Gilman, quien consideraba que el despeje aumentaría la producción y el tráfico de cocaína. Los republicanos desconfiaban, además, de la eficacia del ejército y de su desempeño en materia de derechos humanos. En su criterio, cualquier ayuda tendría como destino a la policía y no a las fuerzas militares.

2. LA INICIACIÓN DEL PROCESO Y LA PERCEPCIÓN DE LA PRENSA

El 7 de enero de 1999 se dio inicio oficial a las conversaciones entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia. El día anterior, la prensa escrita norteamericana reflejó sus concepciones. *The Miami Herald* señaló, por ejemplo, que “los enemigos en Colombia están listos para la guerra si el diálogo falla”. *The New York Times* subrayó, en cambio, el problema de la droga. En alusión a Pastrana, el periódico tituló que “Bogotá ve la guerra de las drogas como sendero hacia la paz”. Varias afirmaciones del presidente, citadas por el diario, confluyen en la importancia de que las FARC-EP asuman un compromiso real con el proceso y “ayuden a destruir los cultivos de coca”: “el primer enemigo de la paz es el narcotráfico, y si las FARC-EP toman la decisión de erradicar los cultivos, lo harán, porque ellos definitivamente tienen la influencia para llevarlo a cabo”. Aunque *The Orange County Register* reprodujo el mismo escrito, el encabezado es diferente: “El presidente colombiano se reunirá con los rebeldes”. Otros titulares son simplemente informativos: “Colombia abre conversaciones con los rebeldes”, o incluso incrédulos: “Rebeldes y ejército, escépticos sobre las negociaciones de paz”, “Histórica reunión con expectativas de fracaso”.⁵

La negativa de Manuel Marulanda Vélez para asistir a la cita inaugural de las conversaciones recibió, de igual manera, diferentes calificativos. *The Orlando Sentinel* calificó el hecho como un “desaire” en contra de las conversaciones de paz. *The Wall Street Journal* lo consideró igualmente un “desaire”, pero contra el presidente Pastrana. *The Cincinnati Enquirer* tituló con simpleza que “el famoso líder rebelde es un no-show”. *The Boston Globe* lamentó el hecho por cuanto “la mayor atracción para centenares de dignatarios y la audiencia nacional de la televisión era la presencia de Marulanda, quien no ha sido visto en público por décadas”. *Union-Tribune*, periódico de San Diego,

advirtió que, a pesar de la ausencia del jefe rebelde, “las conversaciones irán hacia adelante para poner fin a 34 años de guerra civil”. El único periódico que hizo referencia a la carta de Marulanda, leída por Joaquín Gómez, fue el *Houston Chronicle*, en tanto que *The New York Times* explicó la ausencia de Marulanda como producto de “amenazas” hechas en su contra.⁶ De esta manera, poco a poco se perfilaban las posiciones políticas de diferentes diarios norteamericanos con respecto a Colombia. *The New York Times*, por ejemplo, más favorable al proceso de paz y muy consciente de que el problema de la droga es multilateral. *The Miami Herald*, por el contrario, inicialmente cauto, será posteriormente un opositor consistente de la negociación y un representante del ala republicana ligada históricamente a la lucha contra la droga en los países productores.

3. EL PLAN EN MARCHA

El 26 de julio de 1999, la prensa norteamericana emitió una preocupante noticia: un avión RC-7 Dehavilland, con una tripulación compuesta por cinco militares norteamericanos y dos colombianos, se había accidentado en territorio cercano a la zona de despeje, mientras cumplía “operaciones de reconocimiento”.⁷ La conmoción por el hecho coincidió con la visita anunciada por Barry McCaffrey, el zar antidrogas de la Casa Blanca, a Bogotá.

El discurso de McCaffrey tuvo un nuevo tono. Declaró a Colombia “país en seria y creciente emergencia”, y criticó a Estados Unidos por «no haberle prestado una atención suficiente y adecuada». ⁸ Confirmó su petición al Departamento de Estado para “triplicar la ayuda militar americana hasta alcanzar los mil millones de dólares en el próximo año fiscal”,⁹ y advirtió que sólo así podría detenerse el “flujo de dinero, corrupción y violencia que impone la droga”: “hasta que el gobierno colombiano no asegure una presencia en las áreas donde se cultiva la coca, los cultivos de ésta seguirán creciendo y el movimiento guerrillero se continuará fortaleciendo”.¹⁰

Aunque el general Barry McCaffrey señaló que Estados Unidos no intervendría con tropas en Colombia y que se tenía “gran respeto y deferencia por el proceso de paz”¹¹ también expresó que “la línea entre las operaciones antinarcóticos y las contrainsurgentes se borra a menudo por el papel que la guerrilla jugaba en el tráfico de drogas”.¹² Pastrana, por su parte, aseguró que no permitiría intervención militar extranjera en Colombia y que “la solución a los problemas de nuestro país era política y no militar”.¹³ Sin embargo, más adelante advertiría que “el peor enemigo del proceso de paz es el tráfico de drogas” y que “si nosotros derrotamos al narcotráfico, también estaremos derrotando a las guerrillas”.¹⁴

En realidad, la problemática colombiana preocupaba a los norteamericanos. Para el *Houston Chronicle*, la utilización de la ayuda, “en términos prácticos”, fue expresada “en forma clara” por el general Tapias cuando aseguró su empleo “contra los traficantes de droga y cualquier grupo que los apoye”.¹⁵ El mismo diario advirtió después que “Estados Unidos debería empezar a pensar en forma rápida y fuerte acerca de las graves consecuencias que podría ocasionar una intervención militar en la guerra civil colombiana”.¹⁶ Según el *San Francisco Examiner*, la percepción de una “posible intervención”, se veía clara, por parte de “muchos colombianos”, en los “frecuentes viajes de altos funcionarios norteamericanos y en el creciente apoyo que Estados Unidos ofrecía a los militares colombianos en su lucha contra las guerrillas”.¹⁷

No obstante, en concepto de Thomas Pickering, subsecretario de Estado quien estuvo en Bogotá con el propósito de evaluar la estrategia de paz del gobierno y definir en concreto la ayuda militar, Colombia no tenía un plan que «explicara en forma clara las perspectivas del proceso de paz”. Y en ese sentido, Washington no podía tomar la iniciativa: era necesario construirlo si Colombia quería apoyo financiero.

El asunto, desde luego, pasaba por precisar el tipo de apoyo requerido; aspecto sobre el cual el Departamento de Estado poseía ya lineamientos expresos. Según Rand Beers, subsecretario para el control internacional de narcóticos, “la paz a cualquier precio no era una política aceptable”: “el proceso de paz no tenía por qué interferir con la cooperación antinarcóticos”. Para Brian Sheridan, subsecretario de defensa especializado en operaciones especiales, el plan debía ser un proyecto “comprehensivo e integrado para tratar los problemas colombianos”, “fortalecer la economía y la democracia, y al mismo tiempo luchar contra el narcotráfico”.¹⁸

El Plan se hizo. De las versiones iniciales, plasmadas en el Plan de Desarrollo propuesto por el presidente Pastrana al inicio de su gobierno, se pasó a la solicitud de ayuda militar con base en un presupuesto elaborado y sustentado con la participación de asesores norteamericanos destacados por Madeleine Albright y un grupo de funcionarios colombianos encabezados por Jaime Ruiz, jefe de Planeación Nacional.

4. EL DEBATE EN EL CONGRESO NORTEAMERICANO

Aunque el trámite del paquete de ayuda dirigido a Colombia y presentado por el presidente Clinton al Congreso norteamericano, fracasó en la segunda mitad del año 1999, Clinton lo avaló de nuevo el 11 de enero de 2000 como “asunto de emergencia” y de “fundamental interés nacional”. Allí se inició un profundo

debate que colocó al gobierno, al Congreso y a la opinión pública de los norteamericanos, en cuatro posiciones distintas:

BRINDAR AYUDA MILITAR A COLOMBIA PARA ERRADICAR EL NARCOTRÁFICO Y PRESIONAR LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA CON LOS GRUPOS GUERRILLEROS

La propuesta de ayuda norteamericana fue presentada por la Casa Blanca como parte de un plan que buscaba solución integral a los problemas de Colombia: no sólo contenía una estrategia antidrogas, fortalecía el proceso de paz e insistía en la defensa de los derechos humanos; también estimulaba el desarrollo económico y social, e impulsaba reformas al sistema de justicia.

En palabras del presidente Clinton, se trataba de “ayudar a Colombia en los vitales esfuerzos antidrogas”: “*Tenemos un interés nacional apremiante en la reducción de la corriente de cocaína y heroína hacia nuestras costas, y en la promoción de la paz, la democracia y el crecimiento económico en Colombia y la región*”. Como resultado, “a largo plazo”, podría esperarse “una erradicación de drogas más efectiva y una interceptación incrementada de los envíos de drogas ilícitas”.¹⁹

Para Barry McCaffrey, ante todo, ésta era “una de las iniciativas más importantes contra las drogas, jamás propuesta por nuestro gobierno”. Según su criterio, “*la producción de cocaína y heroína que se expande rápidamente en Colombia constituye una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y el bienestar de nuestros ciudadanos*”. Por consiguiente, era “imperativo” “*aportar una cuota justa para combatir la producción y el tráfico de drogas en Colombia*” y, al mismo tiempo, “*apoyar las alternativas de desarrollo económico, el imperio de la ley, los derechos humanos, el buen gobierno y el reasentamiento de las personas desplazadas en el interior*”.²⁰

Aunque para el presidente Clinton y el zar antidrogas, el eje de la ayuda parecía dirigido a la lucha contra el narcotráfico, Madeleine Albright matizaba en detalle cinco prioridades: “*nuestra aporte se usará, primero, para ayudar a entrenar y equipar a las fuerzas de seguridad colombianas para que una parte mayor del país sea puesta bajo el control de la democracia y el imperio de la ley. Segundo, apoyaremos activamente el esfuerzo del presidente Pastrana dirigido a negociar arreglos pacíficos con los grupos armados ilegales. Tercero, aumentaremos drásticamente el apoyo al desarrollo alternativo, al fortalecimiento de los gobiernos locales y a reasentar las personas desplazadas por el conflicto. Cuarto, ampliar-*

mos nuestro apoyo a los esfuerzos para interceptar las drogas. Finalmente, y muy importante, ayudaremos a fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos y a promover la reforma judicial".²¹

Para salirle al paso a la censura de las fuerzas armadas colombianas por su compromiso en la violación de derechos humanos, Albright aseguró que la ayuda no iría "a unidades militares implicadas en atropellos". Sin embargo, era difícil sostener este punto de vista por completo. Las cifras, por ejemplo, ofrecían otra imagen. Un poco más del ochenta por ciento de la propuesta de ayuda estaba concentrado en el fortalecimiento de la fuerza pública, 55% para las fuerzas militares y 27% para la policía. Por el contrario, los recursos para la paz, los derechos humanos y la justicia, tan sólo reunían el 4%, en tanto que la ayuda para los desplazados alcanzaba el 3%. Un 9% final se destinaba al desarrollo alternativo.

Además, una inquietud surgía de hecho ¿la ayuda militar podría usarse contra unidades guerrilleras? La respuesta inicial de Albright fue negativa; la ayuda sólo contemplaba la lucha antinarcoóticos. "Si las guerrillas no están involucradas en el tráfico de drogas, no deben temer a Estados Unidos", aclaró Pickering.²² Pero, de todas maneras, no debía olvidarse que el propio embajador de Estados Unidos en Colombia, Kurtis Kamman, había considerado la necesidad de "proveer más potencia bélica y suficiente personal a las fuerzas militares para que éstas puedan acompañar a la policía en sus esfuerzos contra el narcotráfico". Si se trataba de fumigar cultivos de coca en zonas guerrilleras, la fortaleza militar era necesaria. Y en eso había claridad suficiente.

Fue el mismo Clinton quien, quince días después de lanzar su propuesta de ayuda y de reunirse con Pastrana, aclaró el contenido: "*La amenaza del siglo XXI se encuentra en la asociación de grupos criminales: narcotraficantes, rebeldes políticos, terroristas y traficantes de armas. Colombia, con la intersección de narcotraficantes y rebeldes políticos, se convertirá en la prueba del esfuerzo contra ese enemigo común que no respeta fronteras*".²³

En el fondo, entonces, la propuesta de la administración Clinton pretendía golpear al narcotráfico pero, al mismo tiempo y en forma consecuente, a la guerrilla; mecanismo indispensable para presionar y conducir a ésta hacia la solución política. En este sentido, las declaraciones del general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur fueron más claras y directas: "*aunque comparto la opinión de que la solución a los problemas internos colombianos se encuentra en la negociación, estoy plenamente convencido que la victoria en el terreno de guerra sentaría un precedente, lo cual es precondition para llegar a una negociación significativa y productiva*". "El

ejército de Colombia ha estado esencialmente en una defensa táctica; pero en algún momento tomará la ofensiva, saldrá de los cuarteles y llevará la guerra al territorio enemigo".²⁴

Favorables a esta concepción se manifestaron los editoriales de los diarios *Dallas Morning News* y *Washington Post*. Para el primero, apoyar a las fuerzas armadas colombianas "fortalecería la posición del presidente Pastrana en las negociaciones, ya que la guerrilla se daría cuenta que no puede ganar y que sus ganancias pueden ser interrumpidas".²⁵ Para el segundo, "la mejor razón para la ayuda" era su contribución al "encuentro de una solución negociada para la guerra".²⁶

BRINDAR AYUDA MILITAR CONDICIONADA Y CON RESERVAS A COLOMBIA

La propuesta de la administración Clinton, apoyada por considerables sectores del Congreso, obtuvo sin embargo importantes réplicas. Las dudas afloraron, inicialmente, en las filas demócratas. De acuerdo con su pensamiento, no se podía ofrecer ayuda militar a Colombia sin exigir, como requisito, pleno respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. En una carta pública dirigida a Madeleine Albright, los senadores Patrick Leahy y Edward Kennedy cuestionaron la sensatez de continuar con una política antidrogas cuyo fracaso estaba demostrado, e hicieron un llamado para que las condiciones a la ayuda fueran reales y drásticas. Ellas deberían supeditarse al compromiso auténtico de las fuerzas armadas colombianas en la lucha contra los grupos paramilitares, al juzgamiento en cortes civiles de los militares acusados de violar los derechos humanos, y a la negativa de ayuda para las unidades o guarniciones vinculadas con paramilitares y atropellos en contra de la población.²⁷

En el primer debate realizado en el Congreso a principios del mes de febrero del año 2000, en torno a la responsabilidad de Estados Unidos en la crisis colombiana y acerca del tipo de ayuda que debía brindarse a nuestro país, el senador demócrata Christopher Dodd fijó la posición que caracterizaría a la mayoría de su bancada. "Para Estados Unidos —expresó— el riesgo de terminar involucrado en el conflicto armado colombiano es grande". Mapa en mano, como nunca había ocurrido en el Congreso americano, mostró a sus colegas la ubicación de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare. "Basta con mirar cómo —fueron sus palabras— el centro de mayor cultivo de droga se encuentra próximo a la zona de distensión". Igualmente previno sobre la posibilidad de que, al concentrar recursos y esfuerzos militares en esta región colombiana, los narcotraficantes se desplacen a países vecinos con graves consecuencias. En criterio de Dodd, "muchas dificultades

preocupan, si las cosas no salen como se espera. Pero, a pesar de todo, el *Plan Colombia* es un esfuerzo que vale la pena y que se debe apoyar". Ese mismo día, Clinton reconoció el peligro pero recaló su acuerdo en que "se trata de un riesgo que vale la pena tomar".²⁸

La mayoría republicana, por su parte, presentó ante la propuesta de Clinton la oposición esperada. En primer lugar, el tratamiento al problema del narcotráfico en Colombia era una bandera tradicional republicana que Clinton arrebató. En segundo lugar, se colocaba sobre la mesa una gran ayuda financiera en un año electoral. Y tercero, creaba la ocasión para examinar y criticar la política antinarcóticos del presidente.

En esta dirección, y ya desde 1999, los republicanos fueron radicales frente al tema de la ayuda a Colombia. En un fuerte debate suscitado en el Congreso a principios de agosto de ese año, no pocas intervenciones desataron el rechazo a las políticas de Clinton y Pastrana. En forma directa, el senador Dan Burton alertó sobre el peligro de que Colombia fuera "otro Vietnam". Según sus frases, "el avance de la narcoguerrilla, basado en el dinero de la droga, puede conducir a una debacle tipo Vietnam para Estados Unidos, por culpa de las débiles políticas de la administración Clinton". Agregó que ya tenía "la visión de los americanos abandonando la embajada americana, como ocurrió en Saigón, en 1975". "La utópica solución que el presidente Pastrana y el Departamento de Estado buscan, no existe".²⁹ Mark Souder señaló aspectos similares resaltando la pérdida de vidas norteamericanas. Por su parte, John Mica advirtió que "nuestro hemisferio y los Estados Unidos están frente a uno de los más grandes cambios en la seguridad nacional y regional, si la situación con Colombia continúa deteriorándose". En síntesis: "no habrá dinero mientras nuestro gobierno esté negociando con rebeldes que apoyan a traficantes de narcóticos".³⁰ O, en la voz de Gilman: "No habrá incremento en la ayuda militar mientras el gobierno no recupere el control sobre la zona cedida a los narcoterroristas".³¹ Más claro aún: "*La idea de que un narcoterrorista se esté consolidando a sólo tres horas en avión desde Miami, nos deja en claro que los intereses de seguridad nacional de nuestro país están en juego*".³²

En los debates del Congreso, en febrero de 2000, la crítica republicana adicionó un nuevo matiz: "a despecho de toda la asistencia contra las drogas a Colombia, de todas las audiencias e intensos esfuerzos del Congreso en años pasados, los recursos aprobados no ofrecen resultados", protestó John Mica, republicano de Florida. Agregó en tono de denuncia que "tres helicópteros están ociosos por falta de un blindaje adecuado". No se explicaba cómo la administración Clinton entregaba lentamente equipo militar a Colombia sin exigir resultados. Y tampoco se explicaba cómo—añadió Dan Burton— se espe-

ra entregar ayuda militar "a quienes poseen un dudoso récord en derechos humanos".³³

En conclusión, los líderes republicanos desconfiaban de los resultados de la ayuda hacia Colombia por diversos motivos. Primero, en cuanto oposición, observaban y denunciaban el escaso éxito de las políticas agenciadas por la administración Clinton. Segundo, en su cosmovisión tradicional y muy conservadora, rechazaban la negociación política con el movimiento guerrillero y preferían la confrontación directa con éstos, en cuanto "narcoterroristas". Y tercero, algunos continuaban desconfiando del ejército y preferían a la policía.

Al final, sin embargo, y a pesar de todas las críticas, el apoyo a Colombia era una necesidad. Según el propio Dan Burton, "la guerra en Colombia es tanto nuestra guerra, como lo es de los colombianos". Y en consenso de Paul Coverdell, Mike DeWine y Charles Grassley, republicanos de Iowa, "la propuesta es una buena noticia para Colombia y una buena noticia para nuestra habilidad nacional de hacer frente al flujo de drogas ilegales por nuestras fronteras".³⁴

Desde tiempo atrás, la posición de apoyo militar para enfrentar el tráfico de drogas y el avance de las guerrillas, por encima de toda duda y discrepancia, fue avalada por algunos periódicos como *Los Angeles Times*, para quien "lo que Colombia necesita es una acción decisiva e inmediata. El Congreso debería apresurarse en aprobar la entrega de armas, equipos y otros elementos para suprimir el estado de caos en el campo".³⁵ Diario que coincidía con el *Houston Chronicle*, que señalaba que "sin esta ayuda" se comprometía "la proliferación de la plaga de la cocaína" y el "potencial colapso" de Colombia.³⁶

NEGAR LA AYUDA MILITAR Y CONCENTRAR ESFUERZOS EN LA LUCHA CONTRA LA DEMANDA

Una tercera posición fue defendida por representantes demócratas que expresaron dudas con respecto a los esfuerzos de interdicción realizados en Estados Unidos. En su criterio, "los recursos deberían dirigirse a la educación y la expansión de los centros de tratamiento". Si la ayuda norteamericana contra las drogas en Colombia no ha logrado reducir su producción, "¿por qué —preguntó Janice Schakowsky, demócrata de Illinois— debemos creer que más inversión en ese plan podría alcanzar diferentes resultados?". Formuló igualmente dos preguntas incisivas: "*En nombre de la lucha contra las drogas, ¿debemos invertir en una guerra militar que ha de escalar un conflicto regional, o debemos atacar el mercado de las drogas invirtiendo en prevención y tratamiento en casa? ¿Por qué los esfuerzos parecen dirigidos solamente contra las guerrillas y no contra los grupos paramilitares, acusados de*

*numerosos abusos en contra de los derechos humanos, y quienes controlan también parte del comercio de las drogas?”.*³⁷

A su lado, Edolphus Townes, republicano de Nueva York, en contra de la mayoría de su partido, estimó igualmente que “un creciente involucramiento de Estados Unidos en Colombia podría agravar los problemas”. En su opinión, “los recursos deberían destinarse a programas de prevención en casa”.³⁸ La política antinarcoóticos, por consiguiente, debería orientarse contra la demanda interna a través de programas contra la adicción y planes educativos de carácter preventivo, dirigidos en forma masiva a la población norteamericana.

En el mismo tenor se manifestaron organizaciones como el *Libertarian Cato Institute* y el *John Walsh of Drug Strategies*. “La guerra contra las drogas ha sido inútil. Por tanto, necesitamos mirar otras alternativas, incluso su legalización”. Si, en veinte años de interdicción y erradicación, con más de \$26 billones de dólares invertidos, los resultados no se presentan, “¿no será preferible mirar hacia el tratamiento de los drogadictos?”³⁹

Representantes demócratas y exmilitares encontraron argumentos en las cifras de colombianos que abandonan el país. “Cuando los que tienen el poder y el dinero se van del país, defender la ayuda que se estudia en el Congreso es más difícil”. “Los ricos no pagan impuestos, no prestan servicio militar y esperan a que los pobres sean los que mueran”, dijo Gabriel Marccela, de la Escuela de Guerra de Estados Unidos. Algo similar opinó el general Fred Woerner, ex-jefe del Comando Sur: si los norteamericanos ven que el capital colombiano sale del país en lugar de invertirse en él, “¿por qué deben aportar dinero de sus impuestos cuando el de los colombianos está escapando?” David Obey, demócrata de Wisconsin, fue cortante: “no veo a la sociedad colombiana comprometida en esto; entonces, no veo cómo el dinero de nuestros impuestos va a ayudar, si ustedes no se quieren ayudar”. Situación explicada por Nancy Pelosi en otros términos: “tal parece que los oligarcas y las élites de ese país no han llegado a la decisión de que ellos también tienen que poner su cuota para resolver sus problemas”.⁴⁰

De acuerdo con este grupo de opinión se había manifestado el *Chicago Tribune*: “antes de involucrarse en el caos de Colombia, Washington debería analizar con detenimiento lo que en realidad abastece este conflicto: la insaciable demanda de drogas ilícitas y un sistema que las criminaliza haciendo que su producción y distribución sea inmensamente rentable”.⁴¹

NEGAR LA AYUDA MILITAR Y APOYAR LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA CON LOS GRUPOS GUERRILLEROS

Una cuarta posición temía el involucramiento norteamericano como primer paso hacia un compromiso mayor tan dolo-

roso como el asumido por Estados Unidos con motivo de Vietnam. En tal sentido, *The Sacramento Bee*, observó con preocupación la manera paulatina como Estados Unidos se involucraba en la “guerra doble” de Colombia: “el Pentágono insiste que las tropas de combate de Estados Unidos no serán usadas en Colombia. Sin embargo, el pueblo americano recuerda haber escuchado eso mismo acerca de Vietnam”.⁴²

La posición fue avalada por *The New York Times*. Para este importante diario, “el plan refleja por un lado la falta de una estrategia realista para combatir las drogas, y por el otro, la falta de una estrategia de largo plazo para afirmar la paz y la estabilidad”. Por el contrario, estimaba, “se está arriesgando involucrar a Estados Unidos en una costosa guerra de contrainsurgencia”.⁴³

El *Boston Globe* expresó su acuerdo en este punto: “la americanización de la guerra civil y contra las drogas en Colombia es la repetición de la historia, veinticinco años después de que cayó Saigón...Estamos usando las mismas políticas estúpidas”.⁴⁴ A diferencia de los republicanos, quienes usaban el fantasma de Indochina para oponerse a la negociación con los grupos guerrilleros, el *Boston Globe* evocaba a Vietnam como ejemplo que invitaba a evitar todo involucramiento. Participar en la guerra colombiana era, en su concepto, «una estrategia benéfica para la insurgencia».

Con motivo de los debates en febrero de 2000, el *San Jose Mercury News* insistió en que la estrategia podía resultar peligrosa para Estados Unidos. “Los funcionarios de la administración Clinton pretenden falsamente que la ayuda norteamericana será destinada a combatir el comercio de narcóticos cuando, en realidad, será usada también para combatir a las guerrillas. Los equipos y entrenamiento que se ofrecen — 62 helicópteros y dos batallones más de elite — demuestran que ésta no es, justamente, una guerra contra las drogas”.⁴⁵ Ralph Peters, un exmilitar citado por el *Washington Post*, manifestó con ironía que “aquellos colombianos expatriados que se acuestan perezosos en las playas de Miami o hacen compras en Madrid, seguro están dispuestos a pelear hasta que caiga el último soldado estadounidense”.⁴⁶

En lo fundamental, la mayoría de las ONG apoyaron esta última posición; es decir, negar la ayuda militar, con el argumento de que ello podría desencadenar una escalada del conflicto, agravar la problemática interna, particularmente la de derechos humanos, y cerrar las posibilidades de una salida negociada. Desde muy temprano, Amnistía Internacional advirtió que “apoyar al ejército colombiano, aliado con los grupos paramilitares, equivale a apoyar la guerra sucia en Colombia”.⁴⁷ En carta suscrita por treinta y tres ONG de Estados Unidos se expresaron las “dudas” acerca de la masiva

ayuda militar para Colombia: “Cuestionamos con seriedad su eficacia como política antinarcóticos, la posibilidad de que termine por involucrar a los Estados Unidos en una guerra sin fin, su impacto en la crisis humanitaria de los desplazados, el daño que le puede ocasionar al proceso de paz y su impacto negativo en los derechos humanos. Sería desastroso si las condiciones de derechos humanos pierden su significado desde el principio”.⁴⁸ En sentido similar, la *Federación Americana del Trabajo* consideró que “los Estados Unidos no deberían hacer más fuertes sus lazos con las fuerzas militares quienes han sido responsables de la violencia perpetrada hacia los miembros de los sindicatos. Nuestro gobierno debe hacer más para promover negociaciones de paz...”.⁴⁹

The Atlanta Journal and Constitution defendió, en este sentido, la necesidad de “concentrarnos en mejorar las instituciones no militares en Colombia —la rama judicial y la policía— y aportar para el desarrollo económico”.⁵⁰ Sin embargo, fue el *New York Times* quien lideró siempre esta posición, definida en concreto por un párrafo de sus editoriales: «*El presidente Andrés Pastrana es bien intencionado y merece el apoyo americano. Pero su plan es dirigido en forma abrumadora hacia un tratamiento militar de problemas que por años han resistido a soluciones de este tipo. Washington debería dedicar, por el contrario, una gran porción de su ayuda al fortalecimiento de las instituciones civiles y dirigirla, también, a luchar contra las desigualdades económicas y sociales, que son el verdadero combustible en la guerra y en la economía de las drogas. Ello implicaría, al mismo tiempo, reorganizar y fortalecer la justicia, impulsar estrategias de desarrollo alternativo que permitan al campesino la siembra de cultivos convencionales, parecidos al café y el algodón, y subsidiar la construcción de carreteras y escuelas...*”.⁵¹

Las cuatro posiciones arriba detalladas se expresaron con nitidez en los debates del Congreso a partir del 11 de enero de 2000, fecha en la cual el trámite de aprobación de la ayuda, más conocida como *Plan Colombia*, inició su proceso legislativo en el parlamento de Estados Unidos.

Con la firma de Clinton el 13 de julio de 2000, la aprobación definitiva de la ayuda norteamericana para Colombia alcanzó \$860.3 millones de dólares. El 75% de esta ayuda está dirigida a las fuerzas militares y a la policía. Las primeras recibirán \$519.2 millones en asistencia, \$416.3 de los cuales serán destinados a las operaciones del “Empuje al sur de Colombia”. La suma restante, \$102.3 se empleará en interdicción aérea, marítima y terrestre, y en capacitación militar, incluyendo el área judicial y de derechos humanos. El desarrollo alternativo alcanza el 9%, la reforma judicial y los derechos humanos suman el 3%, equivalente a la cantidad destinada para el apoyo a los despla-

dos. Este período concluye con la visita de Estado que realizó Clinton a Colombia en agosto del año 2000.

5. EL INICIO DE LA ERA BUSH Y LAS CRÍTICAS A SU ENFOQUE

La llegada de Georges W. Bush a la presidencia generó una serie de expectativas acerca del lugar que ocuparía Colombia en la estrategia del nuevo gobierno norteamericano hacia la región. Las declaraciones de Bush en su campaña presidencial fueron discretas. Sostuvo que América Latina sería una prioridad en su agenda de política exterior y, frente al tema colombiano, manifestó su preocupación y su interés por el conflicto en el país, limitando sus comentarios a la aprobación general del paquete de ayuda. Aunque en los primeros meses del mandato Bush los funcionarios norteamericanos han sido cautos en sus declaraciones con respecto a Colombia y se han mantenido dentro del ánimo instaurado por la administración Clinton, lo cierto es que la situación es distinta a la de dos años atrás.

El cambio de gobierno ha dado lugar a un replanteamiento de la política hacia Colombia. Los temas centrales giran alrededor de las drogas y de los derechos humanos. Bush ha actuado con cautela para preservar el frágil consenso político torno a la ayuda norteamericana hacia Colombia, y ha tratado, igualmente, de mantener una política bipartidista hacia ella. Sin embargo, un sector del Congreso aboga por menos ayuda militar y mayor énfasis en las exigencias frente al tema de los derechos humanos. Los republicanos conservadores, por su parte, afirman que promoverán el incremento de la ayuda y permitirán más operaciones contra las guerrillas. Se le pronostica a Bush que “su primera crisis de política exterior puede venir de Colombia”.⁵²

La política de Bush hacia Colombia comenzó a vislumbrarse en marzo cuando el Congreso entró a considerar una ayuda de US\$500 millones para continuar con la estrategia antinarcóticos del *Plan Colombia*. Sin embargo, esta extensión de la ayuda se hace dentro de un marco regional, a través de la llamada *Iniciativa Regional Andina*.

Entre tanto, en el Congreso se vuelven a revivir los debates. Los cuestionamientos con respecto al proceso de paz se han hecho más álgidos. El tema de los paramilitares y de los derechos humanos se ventila con mayor fuerza, como lo revelan la inclusión de los grupos paramilitares en la lista de organizaciones terroristas y el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado.

En una audiencia de la subcomisión de operaciones extranjeras del Senado, demócratas y republicanos volvieron a plantear serias dudas sobre la ayuda antinarcóticos hacia Co-

lombia. El tono del debate lo dio el senador Patrick Leahy: *“Hay una preocupación bipartidista en el Congreso. Y creo que es hora de que revisemos esta estrategia hacia Colombia: erradicación con químicos a pesar de que el fabricante advierte de los riesgos de su uso sobre animales y seres humanos, aviones que son derribados por error o por estupidez. Me cuesta trabajo ver dónde están los éxitos. La cantidad de drogas que llegan al país va en aumento, no en disminución. De pronto, nos estamos gastando la plata donde no corresponde...el gobierno de Colombia parece estar mirando para el otro lado al abordar el tema del paramilitarismo, que se ha duplicado desde que comenzó a aplicarse el Plan Colombia y ahora participa activamente en el negocio del narcotráfico casi en un papel de ‘semicapos’ de la droga... Existe la sensación de que Estados Unidos está manejando la guerra contra las drogas como se manejaba la Guerra Fría, donde apoyábamos a los peores violadores de los derechos humanos si nos decían que eran anticomunistas. En Colombia les estamos dando más plata a los militares que, a su vez, dan más ayuda a los paramilitares y luego éstos cometen atrocidades”*.⁵³

El secretario de Estado, Colin Powell, quien se encontraba testificando en esa misma audiencia, defendió la estrategia que se quiere desarrollar en Colombia, pero advirtió que el país debe demostrar su compromiso en la lucha por la defensa de los derechos humanos: *“Nosotros no apoyamos a los paramilitares. Y lo hemos dejado claro a las autoridades de Colombia, pues es la misma democracia la que está en juego”*—afirmó—.

Por su parte, el senador Mike de Wine, en el marco de otra audiencia que se realizó en el Senado, preguntó las razones para gastar tanto dinero en detener la producción e interdicción si la demanda seguía creciendo.

En efecto, las preocupaciones en torno al tema de los derechos humanos se han constituido en uno de los campos de debate más fuerte sobre la estrategia hacia Colombia, y a ello se agrega el descontento general por la presencia paramilitar. El senador Wellstone afirmó que el apoyo para la futura ayuda proveniente de los Estados Unidos «se erosionará si los militares colombianos no toman medidas prontas y efectivas para

poner fin a las operaciones paramilitares». En una carta del senador demócrata dirigida al general Martín Orlando Carreño, comandante de la quinta brigada militar, ha solicitado emprender acciones contra las bases paramilitares.⁵⁴

Otras voces critican esta nueva etapa de la política norteamericana al considerar que “la iniciativa de Bush puede de hecho contribuir a extender el conflicto colombiano hacia los países vecinos”, ya que podría ser el inicio de “un mayor involucramiento militar en la región, el cual podría prolongarse por varios años”. Igualmente se preguntan si, ante la amenaza de que el conflicto colombiano se extienda a otros países, más ayuda militar norteamericana no sería como “rociarle gasolina al fuego”.⁵⁵

En todo caso, los únicos resultados palpables hasta hoy son la existencia de los batallones antinarcóticos y la amplia campaña de fumigación en el sur del país. El entrenamiento de los 2.398 hombres que conforman esa brigada, comenzó en octubre de 2000 y culminó el 24 de mayo de 2001 con un costo de 16 millones de dólares, financiado por los programas del Departamento de Defensa y con recursos de apoyo al *Plan Colombia*.

En su aplicación inicial, el *Plan Colombia* ha destruido unas 40.000 hectáreas de coca con el herbicida glifosato desde que comenzó su ejecución en diciembre de 2000 en el selvático departamento del Putumayo, en la frontera con Ecuador. Aunque es prematuro juzgar su impacto, los resultados hasta ahora no son los más alentadores. Un reporte de la Naciones Unidas del 19 de mayo indica que los cultivos de coca se han incrementado en un 60% en el último año, mucho más de lo que se pensaba originalmente.⁵⁶ Colombia podría estar produciendo, actualmente, entre 800 y 900 toneladas de cocaína al año, «mucho más de las 580 toneladas estimadas por la DEA». Esto significa que “Colombia sola produce más o menos la misma cantidad de cocaína que la anterior estimación total mundial, en las que se incluye a Perú y Bolivia”.⁵⁷

Ante ello crece una corriente crítica en Estados Unidos que pone en tela de juicio el actual enfoque de la política antinarcóticos. Son cada vez más aquellos que reclaman frente a los magros resultados de las políticas antinarcóticos para frenar la oferta, la necesidad de enfatizar más en los programas que controlen la demanda en el propio Estados Unidos.

* El seguimiento de partes del debate sobre Colombia en Estados Unidos a través de la prensa nos permite sacar varias conclusiones respecto a la relación bilateral y a la formulación y despliegue de la estrategia llamada *Plan Colombia*.

Desde 1998 se evidencia una mayor visibilidad y una preocupación creciente acerca del tema colombiano en Estados Unidos. La visión que existe hoy desde allí es más cercana y compleja que los estereotipos que se manejaron por años. Esto mismo ha contribuido a posicionar el tema ante la opinión pública norteamericana, y a generar un amplio debate sobre la política de Washington hacia Colombia. Un debate que es más «sensible» frente a las coyunturas del país.

El cambio resulta significativo y contrastante; antes, como lo señalamos, la política hacia Colombia estuvo centrada en el tema de las drogas, era debatida y manejada entre unos cuantos funcionarios del Departamento de Estado y unos pocos congresistas, y tenía poco eco en la

opinión pública. Hoy adquiere una dimensión mayor, puesto que aunque la agenda entre los dos países sigue gravitando en torno al tema del tráfico ilícito de drogas, otros temas de interés doméstico en Estados Unidos se ligan a aquel, tornando más compleja la agenda bilateral.

- * A partir de 1999, la prensa norteamericana se ocupó de Colombia como nunca antes. Al examinar el registro de notas publicadas acerca de nuestro país en Estados Unidos durante dicho año, adelantado por la Agencia Burrelle's News Express por encargo de la embajada de Colombia en Washington, la relación de notas acerca del conflicto, las negociaciones con el movimiento guerrillero y el *Plan Colombia*, asciende a 558.⁵⁸

Para el año 2000 las referencias se incrementaron. No sólo en cantidad; los artículos fueron también más extensos e incluso analíticos, no simplemente informativos. Las discusiones adelantadas en el Congreso tuvieron un despliegue considerable; se intentó plasmar la diversidad e involucrar al ciudadano estadounidense en un debate que tocaba sus intereses y su bolsillo. Colombia se convirtió, aparentemente, en tema de interés nacional.⁵⁹

En torno al debate de los norteamericanos con respecto a Colombia, la prensa de ese país continúa empleando a fondo sus páginas y periodistas durante el año 2001. El interés no desciende. Colombia no dejará de ser, durante largo tiempo, un país que provoca preocupación y que invita a la reflexión. Los debates en el Congreso americano, las determinaciones de las instancias estatales en ese país y los sucesos de Colombia ocupan las primeras páginas. Al examinar los artículos publicados en los primeros cinco meses del año 2001, la cantidad de ellos casi iguala, en sólo seis meses, el total de todo el año 1999: 414 en el periodo enero-mayo de 2001, frente a 558 a lo largo de 1999.

Por supuesto, Colombia continúa en la mira de la prensa y de la opinión pública norteamericanas. La problemática interna de nuestro país se ha convertido en asunto importante y prácticamente central en la política norteamericana. El análisis y el debate que en Estados Unidos se efectúe repercutirá, como siempre, en las decisiones gubernamentales, tanto en ese país como, lógicamente, en Colombia.

- * El seguimiento de la prensa nos permite ver cómo surgen los temas en el debate y así mismo como desaparecen. También podemos ver, a través de ella, los ritmos en la construcción de la agenda pública. En Estados Unidos predomina el ritmo que impone la agenda legislativa en la aprobación de los recursos para el *Plan Colombia* y el ritmo del Departamento de Estado. Con respecto a Colombia el ritmo está más ligado a los acontecimientos, especialmente a aquellos que tienen cierta connotación de atrocidad y espectacularidad.
 - * El análisis de la prensa revela igualmente que el *Plan Colombia* no fue una estrategia claramente definida desde el principio. Esta se fue perfilando paulatinamente al calor de los acontecimientos en Colombia y los debates en Estados Unidos. El Plan se construye en la negociación de intereses y posiciones entre el Departamento de Estado, el Congreso norteamericano, las ONG y el gobierno colombiano. En este debate la prensa unas veces refleja aquellas y otras veces fija su propia posición. De este modo se puede vislumbrar la multiplicidad de actores, intereses y escenarios que entran en juego a la hora de definir una política. En este caso, entonces, las políticas hacia Colombia no ha sido el producto de una voluntad deliberada y homogénea.
 - * Esta manera de abordar el tema muestra cómo en la opinión pública colombiana poco trascendió la complejidad del proceso que llevó a la elaboración del *Plan Colombia*. El debate sobre aquel se dio realmente en Estados Unidos y no en el país. Sin embargo, ello no significa que algunos actores domésticos colombianos estuviesen del todo ausentes en ese debate. Los escenarios fueron norteamericanos pero varios de los temas tuvieron un carácter típicamente doméstico, en relación con Colombia.
 - * Es posible evidenciar, por otra parte, que la prensa norteamericana es más diversa y abierta al debate, y refleja mejor los distintos puntos de vista. En eso ha jugado un papel más importante que los medios de comunicación colombianos. Una mayor atención sobre estos escenarios múltiples por parte de la opinión pública colombiana y de sus medios de comunicación, nos permitiría alejarnos de esas imágenes estereotipadas de la posición y la política norteamericana hacia Colombia. Esta manera de abordar el debate público que hasta ahora ha resultado reduccionista, nos pone en una franca desventaja frente a Estados Unidos a la hora de hacer propuestas y negociar con el gobierno norteamericano. Bien dice el refrán popular: "sólo se teme a aquello que se desconoce".
 - * Todo lo anterior señala la necesidad de potenciar los aprendizajes de los actores domésticos en Colombia en relación con la política norteamericana. La utilización y el aprovechamiento de los espacios que allí se generan resulta hoy crucial. El impacto que sobre la opinión pública norteamericana se pueda tener es un factor clave, dada la sensibilidad de las esferas de poder en Washington ante su opinión pública. La capacidad de influir en las decisiones en el Congreso y en el Departamento de Estado, directa o indirectamente, son elementos que los actores domésticos, incluido el gobierno nacional, han ido descubriendo y deben aprovechar.
 - * Finalmente, el análisis de la prensa norteamericana colocó de presente el nivel de la discusión acerca del *Plan Colombia* en el país. Si bien éste se ha convertido en tema obligado de casi todos los sectores, la discusión se polarizó en términos de estar a favor o en contra del plan y, particularmente, del componente "militar". Sin embargo, en general, el debate ha sido pobre y coyuntural en la medida en que muy pocos saben a ciencia cierta de qué se trata. De hecho, no se ha efectuado en el ámbito de la opinión pública nacional un examen a profundidad y detallado del contenido y de las implicaciones del Plan, de sus contradicciones internas, del diagnóstico en el que se basa, de los costos en términos sociales, materiales y políticos para el país, de la articulación o desarticulación con el proceso de paz, de las relaciones con los países vecinos, de la eficacia de la actual estrategia antinarcóticos. Más allá de hablar de un escalamiento del conflicto, de la reproducción de un Vietnam latinoamericano, o de los discursos exaltados por la defensa de la soberanía nacional, aún hoy no existen o no se plantean visiones alternativas, serias y viables, a la estrategia trazada por Estados Unidos y el gobierno colombiano.
- Los colombianos estamos en mora de dar un debate serio, informado, objetivo y democrático, de lo que representa e implica para el país el *Plan Colombia* en su conjunto, tal vez la más ambiciosa, compleja y contradictoria estrategia desarrollada para afrontar uno de los peores conflictos en el escenario internacional de la Posguerra Fría.
- * El autor, Adolfo Aterhortúa, agradece a la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, el apoyo prestado para el desarrollo de la investigación y la redacción de este artículo.

- 1 Para abordar la lectura, dos aclaraciones parecen pertinentes. En primer lugar, se utilizan los términos “norteamericano(a)” o «americano(a)» en la muy corriente alusión a Estados Unidos. Por otra parte, todas las traducciones del inglés al español han sido hechas conservando la fidelidad del contenido y el espíritu de los textos, aunque en la mayoría de ellas se haya evitado su traducción literal.
- 2 “Colombia-Estados Unidos: ¿Distensión?”, *El Tiempo*, diciembre 10 de 1997.
- 3 “Entrevista con Frechette”, en *Semana*, Bogotá, noviembre 10-17 de 1997.
- 4 “Entrevista con Benjamin Gilman», *El Tiempo*, Bogotá, octubre 29 de 1998.
- 5 “Foes in Colombia ready for war if talks fail”, *The Miami Herald*, enero 6 de 1999. “Bogotá sees drug war as path to peace”, *The New York Times*, enero 6 de 1999. “Colombian president will meet with rebels”, *The Orange County Register*, enero 6 de 1999. “Colombia to open talks with rebels”, *The Times Picayune*, enero 6 de 1999. “Rebels, army skeptical on peace deal”, *The Columbus Dispatch*, enero 7 de 1999. “A historic meeting... with failure expected”, *The Orange County Register*, enero 7 de 1999.
- 6 “Fabled rebel leader snubs peace talks in Colombia”. *The Orlando Centinel*, enero 8 de 1999. “Colombia’s president was snubbed”, *The Wall Street Journal*, enero 8 de 1999. “Colombia’s famed rebel leader is no-show”, *The Cincinnati Enquirer*, enero 8 de 1999. “Peace talks open in Colombia without rebel leader”, *The Boston Globe*, enero 8 de 1999. “Colombia rebel chief misses peace meeting. Talks go forward”, *Union-Tribune* enero 8 de 1999. “Rebel leader absent, but show goes on in Colombia”, *Houston Chronicle*, enero 8 de 1999. “Colombian rebel chief says threats made him miss talks”, *The New York Times*, enero 9 de 1999.
- 7 El avión poseía, en realidad, un sofisticado equipo para interceptación del espectro radioeléctrico con el cual, se presume, todas las comunicaciones de las FARC-EP eran espiadas.
- 8 “U.S. anti-drug official leads call for more funds to fight rebels”, *The Washington Times*, julio 27 de 1999, p. A15. “More military aid sought in drug fight”, *The Kansas City Star*, julio 27 de 1999, p. A8.
- 9 “Wreck may be missing plane”, *Detroit Free Press*, julio 29 de 1999, p. A7. Cf., igualmente, “U.S. drug czar asks for another \$1 billion to help rebel-besieged Colombia”, *Houston Chronicle*, julio 17 de 1999, A21.
- 10 “U.S. defends aid to wage drug war in embattled Colombia”, *Chicago Tribune*, julio 27 de 1999.
- 11 *Ibidem*.
- 12 *Chicago Tribune*; art. cit.
- 13 “No foreign intervention, Colombia told”, *The Miami Herald*, julio 29 de 1999, p. 8 A.
- 14 “Capitol Hill divided over Colombian aid appeal”, *Chicago Tribune*; septiembre 23 de 1999, p. 1P4.
- 15 *Houston Chronicle*; art. cit.
- 16 “Not smart for U.S. to get involved in Colombia’s war”, *Houston Chronicle*, julio 30 de 1999, p. A37.
- 17 “Wreckage in Colombia may be U.S. Army plane”, *San Francisco Examiner*, julio 26 de 1999, p. A10.
- 18 Cf. “Danger: U.S. could go to war on the wrong side”, *The Miami Herald*, agosto 27 de 1999, p. 29 A. «Drug Policy labeled ‘disaster’ McCaffrey to urge regional approach in Latin America”, *The Washington Times*, septiembre 23 de 1999, p. A15. “Moment of peril in Colombia: It is imperative that the United States step up its efforts to help Colombia fight drugs...”, *The Orlando Sentinel*, septiembre 2 de 1999, p. A18.
- 19 “Declaración del presidente Clinton sobre ayuda a Colombia”. *La Casa Blanca. Oficina del Secretario de Prensa*. Grand Canyon, Arizona, 11 de enero de 2000. Archivo digital Center for International Policy.
- 20 “Declaración del Director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Barry R. McCaffrey”, 11 de enero de 2000. Archivo digital Center for International Policy.
- 21 “Declaración de la Secretaria de Estado Madeleine K. Albright”. Departamento de Estado. *Oficina del portavoz*, 11 de enero de 2000. Archivo digital Center for International Policy.
- 22 “U.S. Delegation visits Colombia”, por Jared Kotler. *Associated Press Writer*, febrero 15, 2000. Archivo digital Center for International Policy.
- 23 “Clinton sees Colombia aid support”, por Kevin Galvin. *Associated Press Writer*, febrero de 2000, Archivo digital Center for International Policy.
- 24 “El ejército colombiano gana la guerra”, *El Nuevo Herald*, enero 7 de 2000.
- 25 Editorial, *The Dallas Morning News*, febrero 18 de 2000.
- 26 Editorial, *The Washington Post*, Febrero 10 de 2000.
- 27 “US Senators ask State Department to condition its military aid to Colombia on respect for human rights”, *Nizkor English Service, Human Rights Team*, Enero 15 de 2000. Archivo digital Center for International Policy. La crítica de los senadores frente a la estrategia antidrogas se condensa en los siguientes renglones: “Es claro que nuestra política corriente, gracias a la cual se han comprometido millones de dólares en asistencia a las fuerzas de seguridad colombianas, no ha logrado reducir los cultivos de coca ni el ingreso de cocaína y heroína en Estados Unidos. Nosotros creemos que los Estados Unidos y otros países amigos de Colombia deben proveer un gran apoyo diplomático para fortalecer los esfuerzos del proceso de paz y de tal modo crear las condiciones necesarias para una estrategia antinarcóticos más efectiva, que debería contemplar, incluso, programas de desarrollo alternativo”.
- 28 “Clinton sees Colombia Aid Support”, por Kevin Galvin. *Associated press writer*. Archivo digital Center for International Policy.
- 29 “Colombia asks U.S. to give \$ 1.5 billion for drug war”, *Houston Chronicle*, septiembre 23 de 1999, p. A20.
- 30 “Capitol Hill divides over Colombian aid appeal”, *Chicago Tribune*, septiembre 23 de 1999, p. 1P4.
- 31 *News International Relations Committe*. September 22, 1999.
- 32 *Boletín*. Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, marzo 29 de 2000.
- 33 “Lawmakers attack White House’s proposed \$1.6b antidrug Colombia package”, por John Donnelly. *Globe staff*, febrero 15 de 2000.

- Archivo digital Center for International Policy.: "Colombia needs anti-drug help, McCaffrey days", *The Miami Herald*, febrero 16 de 2000.
- 34 *Ibidem*. "U.S., Colombia to meet on drug war", por George Gedda. *Associated press writer*, enero 14 de 2000. Archivo digital *Center for International Policy*.
- 35 Editorial, *Los Angeles Times*, marzo 27 de 2000.
- 36 *Ibid*. En sentido similar, cf. Editorial, *Houston Chronicle*, enero 31 de 2000.
- 37 "Lawmakers attack White House's proposed \$1.6b antidrug Colombia package", por John Donnelly. *Globe staff*, febrero 15 de 2000. Archivo digital *Center for International Policy*. "Colombia aid package defended. Military needs help to retake control of coca fields, House panel told". *The Dallas Mornings News*, febrero 16 de 2000.
- 38 Cf. "Republicans say Colombia could be another Vietnam", *The Columbus Dispatch*, agosto 7 de 1999, p. 7 A. "Colombia could be Vietnam-like calamity, Republicans say", *Fort Worth Star Telegram*, agosto 7 de 1999, p. A24.
- 39 "U.S., Colombia to meet on drug war", por George Gedda. *Associated press writer*, enero 14 de 2000. Archivo digital *Center for International Policy*.
- 40 "Colombia aid package hits roadblock in US Congress". *Reuters*, marzo 23 de 2000. Archivo digital Center for International Policy. Cf., al respecto, los artículos de Sergio Gómez Maseri en "*El Tiempo*", marzo de 2000.
- 41 Editorial, *Chicago Tribune*, febrero 8 de 2000.
- 42 "Andean quagmire? U.S. role in Colombia's double war is growing", *The Sacramento Bee*, julio 31 de 1999, p. B6.
- 43 Editorial, *The New York Times*, febrero 13 de 2000.
- 44 Editorial, *The Boston Globe*, julio 7 de 2000.
- 45 "U.S. fuels civil war in Colombia", *San Jose Mercury News*, enero 14 de 2000
- 46 "Pentagon says won't get sucked into Colombia war". *Reuters*, febrero 15 de 2000. Archivo digital *Center for International Policy*. cf., al respecto, los artículos de Marcela Sánchez en "*El Espectador*", durante el mes de marzo de 2000.
- 47 "Declaración de Carlos Salinas, AIUSA». Archivo digital *Center for International Policy*.
- 48 Carta de 33 ONG estadounidenses con respecto al *Plan Colombia*, julio 31 de 2000. Archivo digital *Center for International Policy*.
- 49 Declaración de la Federación Americana del Trabajo acerca de la situación en Colombia. Diciembre de 1999. Archivo digital *Center for International Policy*.
- 50 Editorial, *The Atlanta Journal and Constitution*, febrero 17 de 2000.
- 51 Editorial, *The New York Times*, febrero 13 de 2000.
- 52 "Combustible Colombia". Editorial, *New York Times*, enero 28 de 2001.
- 53 "Se cuestiona ayuda a Colombia por los 'paras'. *El Tiempo*, mayo 16 de 2001.
- 54 "U.S. senator says future U.S. aid to Colombian military at stake." *Associated Press*, mayo 23 de 2001.
- 55 "What after *Plan Colombia*?", Editorial. *Chicago Tribune*, mayo 18 de, 2001.
- 56 "Satellite study says Colombia coca production leveling". *Associated Press*, mayo 17 de 2001. Archivo digital *Center for International Policy*.
- 57 "Hay mucha mayor producción de cocaína a pesar del *Plan Colombia*", en *CNN.com*, mayo 15 de 2001.
- 58 Es preciso reconocer y destacar la colaboración ofrecida por la embajada colombiana en Washington para fotocopiar sus archivos de prensa. La voluntad y apertura de sus funcionarios fueron fundamentales en la construcción de nuestra base general de datos para 1999.
- 59 Con respecto a dicho año, la amabilidad de Adam Isaacson y del *Center for International Policy*, en Washington, nos permitió disponer de más de setecientos archivos digitales sobre los cables de las agencias de noticias internacionales y las publicaciones realizadas por los más importantes diarios norteamericanos en relación con Colombia. Así mismo, gracias a su colaboración se obtuvo una importante base con los comunicados de prensa emitidos por la Casa Blanca y el Congreso estadounidenses.